

rollar sus tareas como director, hecho de propiedad de un bien al como es el de ejercer el cargo de dicha institución por el lapso de un año y que termina el 28 de junio.

Las 32 informa el Presidente de la Asociación de Canalistas del Laja, don Vemio Barrueto Latapia, expresa que esa institución tiene existencia desde el año 1916 y su obligación es regar aguas a los canales de su jurisdicción, que permiten el regadío de más de 70.000 hectáreas de la provincia de Bío Bío; que en junio de 1991 la Junta General eligió a los siete miembros del directorio, entre los cuales estuvo presente; que su elección estuvo precedida de una inusual campaña de recolección de poderes, oiriciendo descubrirse una gran variedad de manejos por parte de los candidatos. El recurrente, agrega, participó en el trabajo conjunto del directorio, inició una labor de permanente control, achacando al presidente, a los directores y empleados no sólo la comisión de delitos éticamente criticables sino también delitos de las más diversas especies, denuncias, que eran negadas; además, se probaron en una reunión del directorio el 30 de agosto de 1991 y se ratificaron en la Junta General Extraordinaria de fecha 9 de noviembre de 1991, en la que se acordó la inhabilitación del director señor Frindt, inhabilitarlo además, por el plazo de 15 días, por lo que, entonces, no son pues los acuerdos o actos que contengan arbitrariedades, sino son antojadizos, intuitivos o arbitrarios, por el contrario, tales acuerdos o actos son después de medirse serenamente las consecuencias y pensando sólo en el bien común. Además, los acuerdos o actos legales como lo insinúa el recurrente fueron adoptados dentro de la competencia por los órganos competentes. Por último, expresa que el directorio de la Asociación de Canalistas del Laja en su sesión de 30 de junio de 1991 que contó con la presencia del señor Frindt, acordó someter a la Junta General Extraordinaria su decisión de inhabilitarlo, de este

modo, el plazo fatal de 15 días concedido por el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema empezó a correr desde el instante en que el recurrente tomó conocimiento del acuerdo del directorio o en el mejor de los casos el 6 de septiembre de 1991, la que conoció el acto de la sesión anterior, pero en cambio se interpuso el recurso el 20 de noviembre p.p.d. Por último, solicita se rechace el recurso, con costas, acompañando diversos documentos.

A fojas 66 se agregan al recurso copia de los estatutos de la Asociación de Canalistas del Laja.

Con lo relacionado y considerando:

1º al 8º (Eliminados).

9º Que como el agravio se infirió el 9 de noviembre de 1991 y el recurso se interpuso el 20 del mismo mes y año, debe rechazarse la petición de declararlo extemporáneo.”

Corte Suprema, 10 de abril de 1992

Puga González, Juan Alfonso
(recurso de inaplicabilidad)

DL N° 2.695, de 1979 (arts. 15, 16 y 28) – Constitución Política de la República (art. 19 N° 24) – Inscripción de dominio – Derecho de propiedad – Posesión inscrita de inmuebles – Herencia intestada – Regularización de la pequeña propiedad raíz – Procedimientos administrativos – Normas legales anteriores a la Constitución vigente – Derogación tácita de normas – Recurso de inaplicabilidad: requisitos (art. 80 de la Constitución no distingue entre preceptos legales anteriores o posteriores a ella) – Potestades del tribunal de inaplicabilidad (alcance) – Precepto legal (“sistema legal incompatible”) – Continuidad de disposiciones constitucionales (Constitución de 1925, Acta Constitucional N° 3/76 y Constitución de 1980) – Derecho de propiedad – Derechos adquiridos – Nor-

mas legales de excepción a regulación legal común (improcedencia de la inaplicabilidad) – Voto en contra.

DOCTRINA: No corresponde hacer diferencias entre una ley vigente con anterioridad o posterioridad a la Carta Fundamental, en atención a que su artículo 80 no hace diferencia entre una u otra y aun permite que pueda pronunciarse la Corte Suprema sobre la inconstitucionalidad de un sistema incompatible con la aplicación de la norma común, siempre del límite establecido por dicho precepto constitucional.

Lo que se requiere para la procedencia del recurso de inaplicabilidad es la coexistencia, en cuanto a estar vigentes, de una norma constitucional y una legal, sin que ofrezca trascendencia al efecto el que esta última sea o no posterior a la promulgación de la primera.

El ordenamiento consagrado en el DL 2.695, de 1979, se encuentra en pugna con el artículo 19 N° 24 de la Constitución pues permite hacer perder la propiedad de un bien raíz legalmente inscrito a nombre de una persona determinada por la simple circunstancia de que otra lo ha tenido en posesión material durante el lapso de cinco años y haber efectuado una gestión de orden administrativo en la Dirección de Bienes Nacionales.

Las normas del Código Civil referidas al dominio y posesión adquieren con respecto al texto constitucional que fija la respectiva garantía, una connotación particular, pues de algún modo lo integran en cuanto éste previene que sólo la ley puede establecer el modo de adquirir la propiedad, porque es precisamente ese código, que compendia el derecho común, el que define el dominio o propiedad y establece las fuentes o modo de adquirirlo. No se trata, pues, de que se haga valer exclusivamente el antagonismo o antinomia entre dos cuerpos legales de igual jerarquía.

Si una ley a través de diversas disposiciones o en su totalidad, contraviene a determinada norma constitucional, no se divisa el impedimento para interponer el recurso de inaplicabilidad en contra de toda

esa normativa en su conjunto: lo contrario llevaría a exigir que se dedujera respecto de cada precepto tachado de inconstitucional el correspondiente recurso, lo cual aparece improcedente e inoficioso.

El recurso de inaplicabilidad no procede respecto de leyes que se aplicaban con anterioridad a la Constitución actualmente vigente porque tal situación es un problema de vigencia o derogación de normas, desde que "precepto legal" sólo puede jurídicamente considerarse a una norma vigente y no a una derogada, por lo que el constituyente no pudo referirse a ésta sino a aquélla. (Votos en contra).

Sólo es procedente el recurso de inaplicabilidad cuando se trata de un conflicto entre un precepto legal y una disposición constitucional y no entre preceptos de distintas leyes, puesto que de admitirse lo contrario resultaría que cada vez que se dicten normas legales de excepción que se contrapongan a otras normas legales de índole general podrían ser declaradas inaplicables. (Votos en contra).

La normación del DL N° 2.695, de 1979, no contradice o no se encuentra en pugna con el artículo 19 N° 24 de la Constitución ya que éste dispone expresamente que sólo la ley puede establecer el modo de adquirir la propiedad, de usar y disponer de ella y las limitaciones y obligaciones que deriven de su función social, y ello es lo que ha hecho el referido decreto ley; la alteración o posible contraposición entre su artículo y otra ley, como el Código Civil, escapa al ámbito del recurso de inaplicabilidad. (Votos en contra).

Sólo es posible declarar la inaplicabilidad de un determinado precepto legal en relación a una gestión que se ventile en otro tribunal siempre que la aplicación de ese precepto se dirija a establecer o crear la situación en él prevista. Por tanto, no será procedente esa declaración de inaplicabilidad cuando se refiere no a la aplicación del precepto para efectos constitutivos sino para desconocer las consecuencias de un estado o derecho ya conformado o adquirido en virtud de la disposición legal en pugna. Y no será procedente puesto que ya fue aplicado dicho precepto y lo que se pretende es invalidar una situación o de-

recho incorporado al patrimonio, lo que no es objeto de la inaplicabilidad. (Votos en contra).(*)

LA CORTE

Vistos y teniendo presente:

1°.- Que ha deducido recurso de inaplicabilidad don Juan Alfonso González, domiciliado en San José Maipo, Población Chacarilla, Calle N° 56, en representación de doña El-

(*) Sobre inaplicabilidad ver en esta misma vista, tomo y sección, Duhart, pp. 15-19.

En el mismo sentido véase Cardone La (24.4.1992, Rol 16.947), en que se pedía la inaplicabilidad de los "artículos 1°, 2° N° 1 y 2 inc. 2°, inciso 2°, 4° inciso 1°, 5, 19 N° 1, 20 incisos 1°, 22, 23, 24 y 25, el título III y, en general todas las demás disposiciones del DL N° 2.695", de 1979, "porque violan la garantía del derecho de propiedad que consagra el artículo 19 N° 24 de la Constitución" (considerando 1°). Son de interés sus considerandos 5°, 10° y 11° y sobre todo el voto en contrario suscrito por el ministro señor Alvarez, quien obstando compartir el fallo de mayoría en cuanto desestimar que se trataría de una cuestión de derogación tácita de normas legales anteriores a la nueva Constitución, estuvo por rechazar el recurso cuanto al fondo en razón de que a su juicio las disposiciones del DL 2.695/79 no son contrarias vulneran la Constitución en su art. 19 N° 24.

Los considerandos referidos (5°, 10° y 11°) del tenor siguiente:

"5°) Que, en efecto, si los jueces de la instancia pueden decidir que la ley general, que es la Constitución, ha derogado una ley especial común, también puede esta Corte declarar la inconstitucionalidad de esta última, si lo es, con sujeción a lo que dispone el artículo 80 de la Carta Política, que hace distinción alguna entre leyes anteriores y posteriores a ella.

La tesis contraria, sostenida por el señor Fiscal la señora Soto, no se aviene, en consecuencia, con la letra ni con el espíritu de la norma constitucional que consagra en nuestro ordenamiento jurídico fundamental el recurso de inaplicabilidad, que resuelve tampoco el caso de la creación, por la Constitución, de un sistema incompatible con la aplicación de la norma común, lo que sí puede hacer, en cambio, la Corte Suprema, que tiene como Tribunal Único el control de la constitucionalidad de la ley, conforme al mencionado artículo 80;

10°) Que la contradicción o pugna existente con la norma constitucional no sólo está patente en relación a los preceptos legales mencionados por el recurrente sino que alcanza también al Decreto Ley N° 2.695 en su contexto general, en cuyas declara-

Antolina González Viedra, que la, solicitando que de conformidad con el artículo 80 de la Constitución de la República se declararan inaplicables las disposiciones del Decreto Ley N° 2.695 de 30 de mayo de 1979, publicado en el Diario Oficial el 21 de julio de 1979, en el juicio ordinario que se tramita en el Segundo Juzgado de Letras de Valdivia, Rol N° 10.434, caratula Viedra, Elena Antolina c

ciones preliminares que motivan el recurso que "se ha creado un sistema de gestión denominado "saneamiento del dominio público", que tiene por objeto la situación del poseedor material de la propiedad, que los tiene imperfectos en relación vigente sobre la materia, por lo que la solución eficaz al problema, proveniente modificarla, adecuándola a la realidad y estableciendo un nuevo procedimiento de facultades a la autoridad administrativa para la inscripción de los predios poseedores materiales que reúnan las condiciones establecidas en la ley, y que contemplan de la Justicia Ordinaria sólo en los casos de oposición o para garantizar los derechos de manera que, en su totalidad, el sistema tanto de carácter sustantivo como procesal, cuyos objetivos y fines inequívocamente a privar de su dominio legalmente garantizado, al titular sobre su propiedad debidamente inscrito.

11°) Que, por último, cabe hacer presente que ningún obstáculo significa para el presente recurso, la circunstancia de que la derogación tácita como propia de los jueces de la instancia haya sido escrita de apelación por el actor en su rol de oponente, dedujo en instancia definitiva recaída en los autos de Letras de Chaitén, porque el recurso de inaplicabilidad puede interponerse en cualquier gestión o juicio, al margen de los planteamientos que en dicha causa se formularon las partes, ya que basta con la exigencia de demostrar que el recurso, en su estado, y de indicar que pretendiéndose aplicar en contrarios a la Constitución, para luego de la correspondiente tramitación, mirar su competencia y ejercer su control de la norma superior sobre la que confiere precisamente la Carta Política de todo otro tribunal."

"Se previene que el ministro, obstando compartir los fundamentos de mayoría, por los cuales se declara la inaplicabilidad de la ley, en tensión de que el recurso sería

incorporado al patrimonio, lo que es objeto de la inaplicabilidad. (Véase la ley 19.947).(*)

TE

os y teniendo presente:

Que ha deducido recurso de inaplicabilidad don Juan Alfonso Pérez, domiciliado en San José de Población Chacarilla, Calle en representación de doña El

bre inaplicabilidad ver en esta misma ley y sección, Duhart, pp. 15-19.

El mismo sentido véase *Cardone La Roca* (2, Rol 16.947), en que se pedía la inaplicabilidad de los artículos 1º, 2º N.º 1 y 2 inc. 2º.

4º inciso 1º, 5, 19 N.º 1, 20 incisos 1º y 4 y 25, el título III y, en general todas las disposiciones del DL N.º 2.695, de 1979, violan la garantía del derecho de propiedad que el artículo 19 N.º 24 de la Constitución garantiza. Son de interés sus considerandos 1º, 10º y 11º y sobre todo el voto en contra por el ministro señor Álvarez, quien compartió el fallo de mayoría en cuanto a que se trataría de una cuestión de deroga de normas legales anteriores a la Constitución, estuvo por rechazar el recurso al fondo en razón de que a su juicio las normas del DL 2.695/79 no son contrarias a la Constitución en su art. 19 N.º 24. Considerandos referidos (5º, 10º y 11º) son los siguientes:

1º, en efecto, si los jueces de la instancia decidieran que la ley general, que es la Constitución, derogó una ley especial común, tan sólo le esta Corte declarar la inconstitucionalidad de esta última, si lo es, con sujeción a lo que el artículo 80 de la Carta Política, que menciona alguna entre leyes anteriores y posteriores.

2º, si la ley es contraria, sostenida por el señor Fiscal, como lo es, no se aviene, en consecuencia, a la ni con el espíritu de la norma constitucional que consagra en nuestro ordenamiento judicial el recurso de inaplicabilidad, ni tampoco el caso de la creación, por la ley, de un sistema incompatible con la norma común, lo que sí puede hacer, como lo ha hecho la Corte Suprema, que tiene como función el control de la constitucionalidad de la ley.

3º, la contradicción o pugna existente con la Constitución no sólo está patente en los preceptos legales mencionados por el recurrente sino que alcanza también al Decreto Ley 2.695 en su contexto general, en cuyas declara-

Antolina González Viedra, que es su abuela, solicitando que de conformidad a lo dispuesto por el artículo 80 de la Constitución Política de la República se declaren inaplicables las disposiciones del Decreto Ley 2.695 de 30 de mayo de 1979, publicado en el Diario Oficial el 21 de julio del referido año, en el juicio ordinario que sigue en el Segundo Juzgado de Letras de Puento Alto, Rol N.º 10.434, caratulado "González Viedra, Elena Antolina con Ordenes

de inaplicabilidad que motivan su dictación, se dice que "se ha creado un sistema que la legislación ha denominado "saneamiento del dominio de la pequeña propiedad", que tiene por objeto regularizar la situación del poseedor material que carece de títulos o que los tiene imperfectos...", y "que la legislación vigente sobre la materia no ha permitido dar solución eficaz al problema, por lo cual es conveniente modificarla, adecuándola a la realidad actual y estableciendo un nuevo procedimiento que dé facultades a la autoridad administrativa para ordenar la inscripción de los predios a nombre de los poseedores materiales que reúnan los requisitos establecidos en la ley, y que contemple la intervención de la Justicia Ordinaria sólo en los casos de legítima oposición o para garantizar los derechos de terceros"; de manera que, en su totalidad, el Decreto Ley crea un sistema tanto de carácter sustantivo como de índole procesal, cuyos objetivos y efectos conducen inequívocamente a privar de su dominio, constitucionalmente garantizado, al titular de este derecho, sobre su propiedad debidamente inscrita; y

11º) Que, por último, cabe hacer presente que ningún obstáculo significa para la procedencia del presente recurso, la circunstancia de que la tesis de la derogación tácita como propia de la competencia de los jueces de la instancia haya sido planteada en escrito de apelación por el actual recurrente, que, en su rol de oponente, dedujo en contra de la sentencia definitiva recaída en los autos del Juzgado de Letras de Chaitén, porque el recurso de inaplicabilidad puede interponerse en cualquier estado de la gestión o juicio, al margen de las discusiones o planteamientos que en dicha causa hayan podido formular las partes, ya que basta cumplir con la exigencia de demostrar que existe una gestión o juicio, y su estado, y de indicar el o los preceptos que pretendiéndose aplicar en ellos resultan ser contrarios a la Constitución, para que esta Corte, luego de la correspondiente tramitación, pueda asumir su competencia y ejercer su facultad de control de la norma superior sobre la ley común que le confiere precisamente la Carta Fundamental por encima de todo otro tribunal."

"Se previene que el ministro señor Álvarez, no obstante compartir los fundamentos 1º al 6º del fallo de mayoría, por los cuales se desestima la pretensión de que el recurso sería inadmisibles, porque

Guerra, Julia", por ser tal decreto ley contrario a la Constitución Política;

2º.- Que en los autos antes referidos, agrega el recurrente, ha solicitado se declare la nulidad de la inscripción de dominio en favor de la señora Ordenes en el Conservador de Bienes Raíces de Puento Alto, Registro de Propiedad, a fojas 9.271 vuelta, N.º 5.287, del año 1987, correspondiente al predio ubicado en El Melocotón,

en la especie se trataría más bien de una cuestión de derogación tácita de la ley común anterior por normas de una Constitución posterior, estuvo por rechazar el recurso en cuanto al fondo, puesto que a su juicio las disposiciones del Decreto Ley 2.695 no vulneran ni son contrarias a la garantía señalada en el artículo 19 N.º 24 de la Constitución Política.

Tiene para ello en consideración:

1º Que la norma constitucional recién mencionada, que garantiza el derecho de propiedad en sus diversas especies sobre toda clase de bienes corporales e incorporeales, también preceptúa que "sólo la ley puede establecer el modo de adquirir la propiedad, de usar, gozar y disponer de ella y las limitaciones y obligaciones que deriven de su función social...";

2º Que el Decreto Ley 2.695 contiene precisamente un conjunto armónico de disposiciones especiales encaminadas a regularizar o sanear el dominio de la pequeña propiedad raíz, con el propósito, como se expresa en la exposición de motivos de ese cuerpo legal: "de regularizar la situación del poseedor material que carece de títulos o que los tiene imperfectos"; añadiendo "que la legislación vigente sobre la materia no ha permitido dar solución eficaz al problema, por lo cual es conveniente modificarla, adecuándola a la realidad actual y estableciendo un nuevo procedimiento que dé facultades a la autoridad administrativa para ordenar la inscripción de los predios a nombre de sus poseedores materiales que reúnan los requisitos establecidos por la ley, y que contemple la intervención de la Justicia Ordinaria sólo en los casos de legítima oposición o para garantizar los derechos de terceros";

3º Que el mencionado Decreto Ley 2.695, como puede advertirse, se orienta a regir situaciones especiales, respecto de las cuales no cabe aplicar las disposiciones ordinarias de la legislación civil, en particular las que comprenden la denominada "Teoría de la posesión inscrita", que postula que la inscripción de un inmueble constituye garantía, requisito y prueba de la posesión, conforme a lo que fluye de los artículos 686, 696, 702, 724, 728, 730 inciso final, 924 y 2505 del Código Civil, disposiciones que por cierto no están revestidas de rango constitucio-

Camino El Alto sin número, Melocotón Bajo San José de Maipo, de una superficie aproximada de 0,71 hectáreas. Agrega que la propiedad la adquirió la señora Elena González por herencia de sus padres, cuya posesión efectiva fue concedida el 3 de mayo de 1985 por el Cuarto Juzgado Civil de Santiago, la que se inscribió a fojas 1.394 vuelta N° 1.512 del Registro de Propiedad de 1985 de Puente Alto; que dicho dominio fue adquirido por el abuelo de la señora González el año 1896 por compraventa y se encuentra debidamente inscrito en el Conservador de Bienes Raíces. Que no obstante lo antes señalado, la señora Ordenes procedió a obtener inscripción de dominio a su favor

nal, de modo que nada impide al legislador, modificarlas o apartarse de ellas en situaciones especiales creando un estatuto de normas de aplicación particular por razones de interés público general, como acontece con el indicado cuerpo legal;

4° Que, en efecto, en conformidad a la normativa especial establecida en el referido Decreto Ley 2.695, para obtener el reconocimiento de poseedor regular y quedar en situación de sanear la propiedad del correspondiente inmueble y adquirir su dominio por la prescripción adquisitiva que regula, no constituye obstáculo la circunstancia de que existan inscripciones anteriores sobre el mismo inmueble;

5° Que, por lo demás, cabe resaltar que los preceptos del Decreto Ley 2.695 que se reprochan de inconstitucionales no establecen una modalidad para adquirir el dominio que se aparte enteramente de las que para la prescripción adquisitiva contiene el Código Civil, puesto que además de la posesión material del predio, de no menos de cinco años, se requiere también posesión regular, que se otorga mediante la correspondiente inscripción en el Conservador de Bienes Raíces, situación que por ende habilita para adquirir el dominio del inmueble por prescripción una vez transcurrido un año desde la fecha de aquella inscripción; y

6° Que, en consecuencia, esta modalidad especial de adquirir el dominio de ciertos bienes raíces resulta acorde con lo que preceptúa el artículo 19 N° 24 de la Constitución Política, en cuanto por dicha norma se entrega a la ley el establecimiento de los modos de adquirir la propiedad de los bienes corporales e incorporeales, de lo que se sigue que su aplicación no puede llegar a constituir una forma de despojo o privación del dominio, sino que, por el contrario tal modo de adquirirlo está en armonía con la normativa legal y constitucional que faculta su adquisición."

con el procedimiento señalado en el Decreto Ley 2.695 del año 1979 y al contestar la demanda que dedujo en su contra, invocado en su favor lo dispuesto en el referido decreto ley, cuya inaplicabilidad solicita se declare en este caso, en particular de sus artículos 15, 16 y 28;

3°.- Que fundamenta el recurrente petición en la circunstancia de que el decreto ley es contrario a la Constitución especialmente al artículo 19 N° 24 (erróneamente 94) y al Título Séptimo Libro Segundo del Código Civil, pues ha producido una expropiación sin ley alguna, habiendo sido privada de la posesión y de la propiedad doña Elena González, a pesar de que la inscripción de dominio sigue vigente;

4°.- Que doña Julia Ordenes, laborante de casa, viuda, domiciliada en El Melocotón, solicita se rechace el recurso deducido por el recurrente y hace presente que el derecho de dominio inscrito en relación a la propiedad antes indicada, tiene su antecedente en la escritura de partición del 26 de octubre de 1953, autorizada por el notario don Carlos Bravo Gálvez, partición en que se le adjudicó esa propiedad a su madre doña Julia Ordenes viuda de Guerra, y que cuenta con inscripción de dominio vigente a fojas 362 N° 177 del Registro de Propiedad de 1934 del Conservador de Bienes Raíces de San Bernardo;

5°.- Que el señor Fiscal informa, a fojas 46, que el recurso de inaplicabilidad es improcedente, porque como reiteradamente la Corte Suprema ha resuelto, cuando hay una ley vigente con anterioridad a la Constitución que pueda contraponerse a su texto, no se está ante un problema de inaplicabilidad sino de supervivencia de la ley, lo que corresponde resolver a los jueces del fondo. Agrega que la continuidad histórica entre Constituciones no otorga a su norma de reemplazo efectos sobre el pasado, de modo que el hecho generado por una ley anterior es materia que corresponde dilucidar al Tribunal que conoce del litigio, lo que se corrobora con lo dispuesto por el artículo 59

del Código Civil, que dispone que la derogación tácita deja vigente las disposiciones anteriores, aunque versen sobre la misma materia, todo aquello que no sea disposiciones de la nueva Constitución de la cual se infiere que la especie de una cuestión de hecho o derogación tácita de una ley no es materia de un recurso de inaplicabilidad;

6°.- Que no obstante lo antes señalado, esta Corte estima que no puede hacer diferencias entre las disposiciones con anterioridad o posteriores a la Carta Fundamental, en atención al artículo 80 no hace diferencia entre una y otra, y aún permite que pueda darse sobre la inconstitucionalidad de un sistema incompatible con la norma común, siempre que el sistema establecido por el artículo 80 sea constitucional. Por lo demás, en consideración que el Decreto Ley 2.695 fue promulgado durante la vigencia de la Constitución de 1925, las disposiciones sobre el aseguramiento de propiedad tenían el mismo carácter que en iguales principios los que en su oportunidad se establecieron en el Acta Constitucional de 1976, los que fueron recogidos en la Constitución del año 1980;

7°.- Que de consiguiente los diversos textos constitucionales han preocupado de amparar la continuidad, de manera que el Decreto Ley 2.695 no puede calificarse como contrario a los preceptos y ordenamientos en la Constitución respecto de la materia recién indicada, la cita que en el recurso se hace al artículo 19 N° 24 de la Carta Fundamental constituye el cumplimiento del requisito formal que determina la validez de la norma constitucional que establece los preceptos del Decreto Ley 2.695, permitiendo así un punto de vista que permite analizar la situación entre ambos sistemas.

INTA

ocedimiento señalado en el D. 2.695 del año 1979 y al contestar que dedujo en su contra en su favor lo dispuesto en el decreto ley, cuya inaplicabilidad declare en este caso, en particular sus artículos 15, 16 y 28;

que fundamenta el recurrente en la circunstancia de que el es contrario a la Constitución, ante al artículo 19 N° 24 (diciembre 94) y al Título Séptimo del Código Civil, pues ha sido una expropiación sin ley, habiendo sido privada de la posesión la propiedad doña Elena González de que la inscripción de dominio es vigente;

que doña Julia Ordenes, laboradora viuda, domiciliada en El Melocito, se rechace el recurso deducido por el recurrente y hace presente que su dominio inscrito en relación a la escritura de partición de 1953, autorizada por el señor Carlos Bravo Gálvez, partición que le adjudicó esa propiedad a su hija doña Julia Ordenes viuda de Gutiérrez, cuenta con inscripción de dominio ante a fojas 362 N° 177 del Registro de Bienes Raíces de San Bernardo;

que el señor Fiscal informa, a favor de que el recurso de inaplicabilidad sea desestimado, porque como reiteradamente la Corte Suprema ha resuelto, cuando hay una ley vigente con anterioridad a la Constitución que pueda contrariar su texto, no se está ante un caso de inaplicabilidad sino de su derogación por la ley, lo que corresponde a los jueces del fondo. Agrega que la unidad histórica entre Constitución y ley otorga a su norma de reemplazo sobre el pasado, de modo que el deber del juez es el que el legislador ha ordenado por una ley anterior es el que corresponde dilucidar al Tribunal, que conoce del litigio, lo que se debe hacer en lo dispuesto por el artículo 53

del Código Civil, que dispone que "la derogación tácita deja vigente en las leyes anteriores, aunque versen sobre la misma materia, todo aquello que no pugna con las disposiciones de la nueva ley", disposición de la cual se infiere que se trata en la especie de una cuestión de supervivencia o derogación tácita de una ley, lo que no es materia de un recurso de inaplicabilidad;

6°.- Que no obstante lo informado a fojas 46, esta Corte estima que no corresponde hacer diferencias entre una ley vigente con anterioridad o posterioridad a la Carta Fundamental, en atención a que el artículo 80 no hace diferencia entre una u otra, y aún permite que pueda pronunciarse sobre la inconstitucionalidad de un sistema incompatible con la aplicación de la norma común, siempre dentro del límite establecido por el artículo 80 del texto constitucional. Por lo demás, se debe tener en consideración que el Decreto Ley N° 2.695 fue promulgado durante la vigencia de la Constitución de 1925, cuyas disposiciones sobre el aseguramiento del derecho de propiedad tenían el mismo ámbito y se inspiraban en iguales principios de aquellos que en su oportunidad se consagraron en el Acta Constitucional N° 3 de 11 de septiembre de 1976, los que a su vez fueron recogidos en la Constitución aprobada el año 1980;

7°.- Que de consiguiente, en relación a los diversos textos constitucionales que se han preocupado de amparar la propiedad, no se divisa interrupción o solución de continuidad, de manera que el Decreto Ley 2.695 no puede calificarse como anterior a los preceptos y ordenamiento establecidos en la Constitución de 1980 respecto de la materia recién indicada, y, por ello, la cita que en el recurso se hace del artículo 19 N° 24 de la Carta Fundamental constituye el cumplimiento de un mero requisito formal que determina cuál es la norma constitucional que contraviene los preceptos del Decreto Ley N° 2.695, estableciendo así un punto de referencia que permite analizar la situación de contraposición entre ambos sistemas. En defini-

tiva, lo que se requiere para la procedencia del recurso en estudio es la coexistencia, en cuanto a estar vigentes, de una norma constitucional y una legal, sin que ofrezca trascendencia al efecto el que esta última sea o no posterior a la promulgación de la primera;

8°.- Que esa situación se plantea en el caso sub lite, pues está en vigor el Decreto Ley 2.695 y el artículo 19 N° 24 de la Constitución Política, de suerte que el punto a establecer incide en si estas disposiciones están o no en pugna. Al efecto, es útil hacer referencia a las que se contienen en el aludido decreto ley, en la parte que interesa al problema. En su artículo 15 se dice textualmente: "La resolución del Servicio que acoja la solicitud se considerará como justo título. Una vez practicada su inscripción en el Registro del Conservador de Bienes Raíces, el interesado adquirirá la calidad de poseedor regular del inmueble para todos los efectos legales, aunque existieren en favor de otras personas inscripciones que no hubieran sido materialmente canceladas.

Transcurrido un año completo de posesión inscrita no interrumpida, contado desde la fecha de la inscripción, el interesado se hará dueño del inmueble por prescripción, la que no se suspenderá en caso alguno".

El artículo 16 es del siguiente tenor: "Como consecuencia de lo dispuesto en el artículo precedente, expirado el plazo de un año a que esa disposición se refiere, prescribirán las acciones emanadas de los derechos reales de dominio, usufructo, uso o habitación, servidumbres activas y el de hipotecas relativos al inmueble inscrito de acuerdo con la presente ley.

Las anteriores inscripciones de dominio sobre el inmueble, así como la de otros derechos reales mencionados, las de los gravámenes y prohibiciones que los afectaban, una vez transcurrido el citado plazo de un año, se entenderán canceladas por el solo ministerio de la ley, sin que por ello recobren su vigencia las inscripciones que antecedian a las que se cancelan.

Con todo, si las hipotecas y gravámenes hubiesen sido constituidos por el mismo

solicitante o por alguno de los antecesores cuya posesión legal o material se hubiera agregado a la suya, dichas hipotecas y gravámenes continuarán vigentes sobre el inmueble. Subsistirán, igualmente, los embargos y prohibiciones decretados en contra del solicitante o de alguno de sus antecesores; pero ello no será óbáculo para practicar las inscripciones que correspondan”.

Las referidas disposiciones deben complementarse con lo que previene el artículo 2° inciso 2°, en cuanto tales derechos pueden ejercitarse aunque sobre el inmueble existen inscripciones de dominio anteriores; con el artículo 4 inciso 3°, que dispone que no significa reconocimiento de derecho ajeno de parte del poseedor material del inmueble la existencia de una inscripción de dominio sobre el predio; y con el artículo 11, que en su párrafo final señala que los avisos a publicar en que se reconozca la calidad de poseedores regulares a los peticionarios, deberán contener, entre otras menciones, “la respectiva inscripción si fuere conocida” (se refiere a la de dominio), y agrega que en esas publicaciones “deberá prevenirse que, si dentro del plazo de 30 días hábiles contados desde la publicación del último aviso, o se dedujere oposición por terceros, se ordenará la inscripción a nombre del solicitante”;

9°.- Que, a su vez, el artículo 19 N° 24 de la Constitución Política de la República asegura a todas las personas el derecho de propiedad en sus diversas especies sobre toda clase de bienes corporales e incorporeales, y agrega, “sólo la ley puede establecer el modo de adquirir la propiedad, de usar, gozar y disponer de ella y las limitaciones y obligaciones que derivan de su función social. Esta comprende cuanto exijan los intereses generales de la Nación, la seguridad nacional, la utilidad y la salubridad públicas y la conservación del patrimonio ambiental.

Nadie puede, en caso alguno, ser privado de su propiedad, del bien sobre que recae o de algunos de los atributos o facultades esenciales del dominio, sino en virtud de una ley general o especial que

autorice la expropiación por causa de utilidad pública o de interés nacional, calificada por el legislador.

Si se compara y vincula el referido precepto con los artículos 582 y siguientes del Código Civil que se refieren al derecho de dominio, con los artículos 700 y siguientes del mismo texto que se refieren a la posesión, y sus demás disposiciones que complementan a las señaladas, no puede menos que inferirse que el ordenamiento consagrado en el Decreto Ley N° 2.695 encuentra en clara pugna con el artículo 19 N° 24 de la Constitución parcialmente transcrito precedentemente, pues permite hacer perder la propiedad de un bien legalmente inscrito en el Conservador de Bienes Raíces a nombre de una persona o personas determinadas, por la simple circunstancia de que otra lo ha tenido en posesión material durante el lapso de cinco años y haber efectuado una gestión en orden administrativo en la Dirección de Tierras y Bienes Nacionales;

10°.- Que las normas del Código Civil referidas al dominio y posesión adquieren con respecto al texto constitucional que fija la respectiva garantía una connotación particular, pues de algún modo lo integran cuanto éste previene “que sólo la ley puede establecer el modo de adquirir la propiedad”, porque es precisamente ese Código, que compendia el derecho común, el que define el dominio o propiedad, y, lo que es de primera importancia, establece las fuentes o modo de adquirirla; no se trata, entonces, que en el caso del presente recurso se haga valer exclusivamente el antagonismo o antinomia entre dos cuerpos legales de idéntica jerarquía;

11°.- Que de lo antes anotado se desprende que el Decreto Ley N° 2.695, considerado globalmente en el conjunto de sus normas, se encuentra en situación de contravención con el precepto constitucional antes indicado, esto es, el artículo 19 N° 24, al establecer un sistema de privación de la propiedad no consagrado en los principios que fluyen de la Carta Fundamental; y

12°.- Que por último, si a la luz de diversas previsiones de la totalidad, contraviene a la norma constitucional, no se permite el fundamento para interponer el recurso de inaplicabilidad en contra de la norma en su conjunto. Lo mismo en cuanto a la posición que sólo se puede hacer valer en virtud de un solo precepto contra el que lo que se ha entregado, mediante este recurso exclusivo de resguardo o control de la constitucionalidad de las leyes-, implica en relación a cada precepto legal -por considerarlo opuesto a la Constitución-, el respectivo recurso de inaplicabilidad, lo cual, al margen de las consideraciones que se pueden hacer relativas al espíritu y finalidad del recurso, resulta de primera instancia procedente e inoficioso.

Es de anotar, también, que los integrantes de la Corte de la Constitución de acuerdo con esta materia, razón de sentido, lo que se consigna en las expresiones que se añaden a la constitucionalidad de una ley que se dictasen”, etc., y agrega la redacción del artículo 19 de la Constitución cuando alude al precepto legal contrario”, y cuando decía a “cualquier

Atendido lo razonado y el artículo 80 de la Constitución del Estado y el Auto Acordado del 13 de marzo de 1932 “Sobre Su Recurso de Inaplicabilidad”, se acoge el recurso deducido por don Juan González en representación de Antolina González Vieda, que el Decreto Ley N° 2.695 de 1979 y publicado en el número 21 de julio del referido boletín, normas para regularizar la pequeña propiedad raíz, violan la Constitución del dominio sobre la propiedad inmueble en el juicio ordinario. Segundo Juzgado de L. de lo Civil, rol N° 10.434, car

ce la expropiación por causa de utilidad pública o de interés nacional, cabe por el legislador.

se compara y vincula el referido con los artículos 582 y siguientes del Código Civil que se refieren al dominio, con los artículos 700 y siguientes del mismo texto que se refieren a la posesión, y sus demás disposiciones complementan a las señaladas, no puede inferirse que el ordenamiento contenido en el Decreto Ley N° 2.695 entra en clara pugna con el artículo 24 de la Constitución parcialmente citado precedentemente, pues permite perder la propiedad de un bien realmente inscrito en el Conservador.

Raíces a nombre de una persona determinadas, por la simple circunstancia de que otra lo ha tenido en material durante el lapso de cinco años y haber efectuado una gestión administrativa en la Dirección de Bienes Nacionales;

- Que las normas del Código Civil atribuyen al dominio y posesión adquiridos respecto al texto constitucional la respectiva garantía una con la otra, particular, pues de algún modo se debe establecer el modo de adquirir la propiedad, porque es precisamente lo que define el dominio o propiedad, y es de primera importancia, de las fuentes o modo de adquirirla, entonces, que en el caso del recurso se haga valer exclusivamente el antagonismo o antinomia entre los cuerpos legales de idéntica jerarquía.

Que de lo antes anotado se desprende que el Decreto Ley N° 2.695, con carácter globalmente, en el conjunto de las normas, se encuentra en situación de pugna con el precepto constitucional indicado, esto es, el artículo 19 que establece un sistema de propiedad no consagrado en los principios que fluyen de la Carta Fundamental.

12°.- Que por último, si una ley, a través de diversas previsiones, más aún en su totalidad, contraviene a determinada norma constitucional, no se divide el impedimento para interponer el recurso de inaplicabilidad en contra de toda esa normativa en su conjunto. Lo que se argumenta en cuanto a la posición de que éste sólo se puede hacer valer cuando se trata de un solo precepto contrario —supuesto que lo que se ha entregado a esta Corte mediante este recurso excepcional es el resguardo o control de la constitucionalidad de las leyes—, implicaría interponer en relación a cada precepto de un texto legal —por considerarlo opuesto a la Constitución—, el respectivo recurso de inaplicabilidad, lo cual, al margen de otras consideraciones que se puede hacer valer relativas al espíritu y finalidad de tal recurso, resulta de primera impresión improcedente e inoficioso.

Es de anotar, también, que la opinión de los integrantes de la Comisión Redactora de la Constitución de 1925, en relación con esta materia, razona en el mismo sentido, lo que se consigna en las reiteradas expresiones que se atienen a “la inconstitucionalidad de una ley”, “de las leyes que se dictasen”, etc., a lo que se agrega la redacción del artículo 80 de la Constitución cuando alude a “todo precepto legal contrario”, y en la anterior cuando decía a “cualquier precepto legal”.

Atendido lo razonado y lo dispuesto en el artículo 80 de la Constitución Política del Estado y el Auto Acordado de 22 de marzo de 1932 “Sobre Substanciación del Recurso de Inaplicabilidad de las Leyes”, se acoge el recurso deducido en lo principal de fojas 6 por don Juan Alfonso Puga González en representación de doña Elena Antolina González Viedra, y se declara que el Decreto Ley N° 2.695 de 20 de mayo de 1979 y publicado en el Diario Oficial de 21 de julio del referido año, que fija normas para regularizar la posesión de la pequeña propiedad raíz y para la constitución del dominio sobre ella, es inaplicable en el juicio ordinario seguido en el Segundo Juzgado de Letras de Puente Alto, sobre nulidad de inscripción de dominio, rol N° 10.434, caratulados “González Viedra, Elena Antolina con Ordenes Guerra, Julia”.

Se previene que el ministro señor Jordán no comparte el fundamento 6° desde donde dice “y aún permite...” etc., y el 7° hasta donde termina en las expresiones “ambos sistemas”.

Acordada con el voto en contra de los ministros señores Cereceda, Faúndez, Dávila, Álvarez y Garrido, quienes estuvieron por rechazar el recurso de inaplicabilidad deducido en lo principal de la presentación de fojas 6, teniendo para ello presente:

1°) Que en la especie el recurrente solicita se declare que el Decreto Ley N° 2.695 es inaplicable en el juicio ordinario que sigue en el Segundo Juzgado de Letras de Puente Alto y que se indica en el considerando primero de este fallo, porque sería contrario a la Constitución Política de la República, atendido lo preceptuado por su artículo 19 N° 24; pero al efecto debe tenerse en cuenta que para los disidentes —como se señaló latamente en otra sentencia dictada por esta Corte sobre la misma materia, en la que se analizaron tanto las actas de la Comisión Constituyente de 1925 y la opinión de la doctrina—, el recurso de inaplicabilidad no procede respecto de leyes de rango inferior al constitucional, que se aplicaban con anterioridad a la Carta Fundamental, porque tal situación es un problema de vigencia, de determinación de si algunos preceptos de ese decreto ley están o no derogados por la nueva normativa constitucional. Al efecto debe tenerse en cuenta que el referido decreto ley tiene fecha 30 de mayo de 1979 y fue publicado en el Diario Oficial el 21 de julio de 1979, en tanto que la Constitución Política entró en vigencia el 11 de marzo de 1981, de modo que el texto legal cuya inaplicabilidad se plantea es anterior a la Constitución con la cual se sostiene se encontraría en pugna, lo que permite considerar improcedente el recurso;

2°) Que la doctrina recién enunciada se desprende del mismo artículo 80 de la Constitución, que es el que faculta a la

Corte Suprema para declarar, en relación a cualquiera gestión que se siga ante otro tribunal, "inaplicables para esos casos particulares, todo precepto legal contrario a la Constitución...", que si bien no distingue expresamente entre precepto legal anterior o posterior a su vigencia, no lo hace porque obviamente era innecesario. En efecto, la referida disposición constitucional no escapa a las reglas de aplicación e interpretación inherentes al ordenamiento jurídico nacional, como sucede con todo texto legal, aceptadas tanto por la doctrina nacional como universal, y que en el país consagra expresamente el Código Civil en su artículo 52, que reconoce dos clases de derogación: la expresa y la tácita, y precisa que esta última se da "cuando la nueva ley contiene disposiciones que no pueden conciliarse con la ley anterior", de lo que se desprende que cuando un precepto legal anterior a la vigencia de la Constitución se encuentra en contradicción con esta última, corresponde determinar si está o no derogado tácitamente, criterio que se corrobora —como lo señala el Ministerio Público—, con el artículo 53 del mismo Código, que literalmente expresa: "La derogación tácita deja vigente en las leyes anteriores, aunque versen sobre la misma materia, todo aquello que no pugna con las disposiciones de la nueva ley". Esta interpretación resulta armónica no sólo con los principios generales del derecho, sino también con la naturaleza teleológica del presente recurso, cuyo objetivo es superar situaciones de inaplicabilidad —y no de obsolescencia— de un precepto legal. Jurídicamente sólo se puede considerar "precepto legal" a una norma vigente, la ley derogada no lo es, sino que lo fue, de manera que el Constituyente no pudo referirse a ella. Además, es principio de ordenamiento que el procedimiento observe una sistemática lógica, y en esa forma debe entenderse, porque constituye una garantía de eficiencia para el ejercicio de las pretensiones y de las defensas de los que en ellos intervienen, y es evidente que metodológicamente determinar si está o no derogado un precepto es previo a determinar su posible inaplicabilidad. De modo que el artículo

80 de la Constitución no puede aludir a la ley anterior en pugna con su texto porque la ha derogado; ni es posible comprenderla por vía interpretativa, puesto que se refiere a "preceptos legales", y éstos son únicamente los vigentes; importaría un contrasentido resolver sobre la posible inaplicabilidad de un texto contrario a la Constitución, que por mandato del artículo 52 del Código Civil está derogado por ella.

3º) Que, por otra parte, el artículo 80 de la Constitución faculta a esta Corte Suprema para declarar inaplicable "un precepto legal", pero no una ley globalmente considerada, como sería una codificación o aquella integrada por un conjunto de preceptos que reglan una institución determinada, así la Ley de Quiebras, sobre Cuentas Corrientes Bancarias y Cheques, sobre Compraventa de Cosas Muebles a Plazo, por mencionar algunas de las innumerables actualmente vigentes. Tanto la Constitución como el Código Civil y demás textos hacen diferencia entre "precepto legal" y "ley"; suficiente es el tenor de los artículos 13, 22, 23, 52 y 53 de este último Código; otro tanto sucede con la Constitución, basta citar sus artículos 6, 63 y la disposición sexta transitoria. De lo señalado se infiere que el recurso de inaplicabilidad limita la declaración únicamente a disposiciones específicas de una ley, y no de toda una normativa integralmente considerada. Como se trata de un recurso excepcional, su alcance ha de ser entendido en su exacta dimensión; ampliar su ámbito podría transgredir las limitaciones propias del rol que corresponde a los distintos poderes del Estado. En el caso en estudio, el Decreto Ley N° 2.695 contiene una normativa que regula la pequeña propiedad raíz; este Tribunal sólo está facultado para pronunciarse sobre la inaplicabilidad de algún o algunos de sus preceptos, pero no es posible declarar la inaplicabilidad del mismo en su conjunto;

4º) Que aun en el supuesto, no compartido por los disidentes, de que el artículo 80 de la Constitución es aplicable a preceptos anteriores a su vigencia, como

en todo recurso de esta índole, considerarse dos aspectos funcionales: sólo es procedente cuando existen conflictos entre un precepto constitucional, y no así entre preceptos de otras leyes que no tienen carácter constitucional; y b) este recurso no tiene por objeto atentar contra las consecuencias de las situaciones, estados de hecho creados o conformados por la ley, sino que se solicita la declaración de la inaplicabilidad, aspectos que se desarrollarán a continuación.

5º) Que, en efecto, reiterando la jurisprudencia de esta Corte Suprema, declarado que la situación de un precepto para los efectos de este recurso sólo puede declararse contrario a la Constitución de hacerlo cuando es contrario a la Constitución de las leyes; de otro modo cada vez que se promulguen normas de excepción que contrapongan a otras de carácter general, podrían declararse inaplicables las prescripciones de corto tiempo para oponer excepción a la Constitución misma. La normativa del Decreto Ley N° 2.695 no contradice o se encuentra en contradicción con el artículo 19 N° 24 de la Constitución, que es el que se invoca recurrente, pues este precepto dispone que "sólo la ley establece el modo de adquisición, de usar y disponer de bienes, de obligaciones y obligaciones que afectan a la función social", que es precisamente lo que ha hecho el decreto ley en la alteración o posible modificación de la ley, como sería el Código Civil en el ámbito de este recurso;

6º) Que sólo es posible declarar la inaplicabilidad de un precepto legal en relación a una ley que se ventile en otro Tribunal, no la aplicación de ese precepto.

a Constitución no puede aludir a anterior en pugna con su texto; la ha derogado; ni es posible compararla por vía interpretativa, pues se refiere a "preceptos legales", y éstos son los vigentes; importaría rasentido resolver sobre la posibilidad de un texto contrario a la acción, que por mandato del artículo 104 del Código Civil está derogado por ella.

Que, por otra parte, el artículo 80 de la Constitución faculta a esta Corte para declarar inaplicable "una ley o legal", pero no una ley globalmente considerada, como sería una codificación, aquella integrada por un conjunto de preceptos que reglan una institución jurídica, así la Ley de Quiebras, Ley de Cuentas Corrientes Bancarias y Ley sobre Compraventa de Cosas Muebles a Plazo, por mencionar algunas de las innumerables actualmente vigentes. La Constitución como el Código Civil en sus textos hacen diferencia entre "ley" y "legal"; suficiente es el ejemplo de los artículos 13, 22, 23, 52 y 53 del último Código; otro tanto sucede con la Constitución, basta citar sus artículos 63 y la disposición sexta transitoria. Lo señalado se infiere que el recurso de inaplicabilidad limita la declaración a disposiciones específicas de una ley, y no de toda una normativa íntegramente considerada. Como se trata de un recurso excepcional, su alcance ha de ser limitado en su exacta dimensión; su ámbito podría transgredir las funciones propias del rol que corresponde a los distintos poderes del Estado. Como en estudio, el Decreto Ley N° 2.695 contiene una normativa que regula la pequeña propiedad raíz; este Tribunal está facultado para pronunciar sobre la inaplicabilidad de alguno de sus preceptos, pero no es posible declarar la inaplicabilidad del mismo en su conjunto;

que aun en el supuesto, no comparecen los disidentes, de que el artículo 80 de la Constitución es aplicable a las leyes anteriores a su vigencia, como

en todo recurso de esta índole, deben considerarse dos aspectos fundamentales: a) sólo es procedente cuando se trata de conflictos entre un precepto legal y el texto constitucional, y no así con disposiciones de otras leyes que no tengan ese rango; y b) este recurso no tiene por objetivo atentar contra las consecuencias o efectos de las situaciones, estados o derechos ya creados o conformados por el precepto legal con anterioridad a la gestión en relación a la cual se solicita la declaración de inaplicabilidad, aspectos ambos que se desarrollarán a continuación;

5°) Que, en efecto, reiteradamente la jurisprudencia de esta Corte Suprema ha declarado que la situación de pugna de un precepto para los efectos de este recurso sólo puede declararse cuando es contrario a la Constitución; no corresponde hacerlo cuando es contrario a otras leyes; de otro modo cada vez que se promulguen normas de excepción que se contrapongan a otras de índole general podrían declararse inaplicables —así las prescripciones de corto tiempo, las limitaciones para oponer excepciones—, de suerte que la contradicción del precepto legal debe ser con una norma contenida en la Constitución misma. En la especie, la normativa del Decreto Ley N° 2.695 no contradice o se encuentra en pugna con el artículo 19 N° 24 de la Carta Fundamental, que es el que se invoca por el recurrente, pues este precepto expresamente dispone que "sólo la ley puede establecer el modo de adquirir la propiedad, de usar y disponer de ella y las limitaciones y obligaciones que deriven de su función social", que es precisamente lo que ha hecho el decreto ley cuestionado; la alteración o posible contraposición que pueda existir entre su articulado y otra ley, como sería el Código Civil, escapan al ámbito de este recurso;

6°) Que sólo es posible declarar la inaplicabilidad de un determinado precepto legal en relación a una gestión que se ventile en otro Tribunal siempre que la aplicación de ese precepto se dirija a

establecer o crear la situación en él prevista; de consiguiente, no será atinente tal declaración cuando se refiera no a la aplicación del precepto para efectos constitutivos, sino para desconocer las consecuencias de un estado o derecho ya conformado o adquirido en virtud de la disposición legal en pugna. En estos casos no se trata ya de establecer la inaplicabilidad de un precepto, pues fue aplicado, sino de invalidar una situación o derecho incorporado al patrimonio, lo que es diverso; el precepto aquí se aplicó y creó la situación en él prevista. De no ser así, la inseguridad y la incertidumbre de los derechos adquiridos conforme a una normativa jurídica dada, que con posterioridad una Constitución puede modificar, se mantendrían ad eternum; en cualquiera gestión seguida en un tribunal se podría solicitar su inaplicabilidad dejando al titular en la indefensión y sin protección a pesar de que su derecho fue válidamente incorporado a su patrimonio. De los autos tenidos a la vista aparece que lo solicitado por el demandante es la cancelación de una inscripción de dominio efectuada con posterioridad a la que sostiene existe a su favor, inscripción que según lo expresado por la parte demandada obtuvo conforme a las prescripciones del Decreto Ley N° 2.695, o sea, en su caso ya fueron aplicadas esas disposiciones sin que nadie discutiera o planteara su contradicción con la Constitución, y el derecho se incorporó a su patrimonio en esa oportunidad, todo ello, sin perjuicio de que se discuta la preeminencia que puede tener la inscripción de dominio que invoca el demandante, o su mejor título; de consiguiente, en ese litigio no es procedente declarar la inaplicabilidad del decreto ley por cuanto no es eso lo que está en controversia, sino los efectos o consecuencias del derecho que creó con su anterior aplicación;

7°) Que, finalmente, corresponde hacer notar que en el Decreto Ley N° 2.695 no se establece un sistema que esté en contraposición con el consagrado por el Código Civil, pues como se desprende de

su contexto, en especial de los artículos 2 N.ºs 1, 3, 4, 12 y 15, exige una posesión material de cinco años, y una vez acreditada la misma en la forma que señala, y sin que medie oposición de terceros, permite que se inscriba dicha posesión en el Conservador de Bienes Raíces, posesión que por esa inscripción pasa a ser regular y habilita al interesado para adquirir el dominio del inmueble por prescripción, que en este caso especial es de un año; los señalados son título y modo de adquirir reconocidos y consagrados por la legislación civil que en ningún caso alteran el sistema de posesión inscrita, sin perjuicio de que le imponga limitaciones; tampoco puede calificarse como un procedimiento dirigido a privar o despojar de la propiedad, porque en nuestro sistema se acepta que ésta se pierda cuando un tercero la adquiere por prescripción; las modalidades del sistema —como la Constitución lo autoriza—, es materia de ley, y eso es lo que precisamente hace el decreto ley cuya inaplicabilidad se solicita.

El señor Alvarez previene en relación al voto disidente, que no comparte sus razonamiento 1º y 2º.

Agréguese copia de esta resolución a los autos en que incide el recurso, que se han tenido a la vista, y devuélvanse al Tribunal de origen.

Regístrese y archívese.

Redacción del ministro suplente señor Mario Garrido Montt.

Nº 16.672.

Pronunciada por el señor Presidente don Enrique Correa L. y los ministros señores Rafael Retamal L., Emilio Ulloa M., Marcos Aburto O., Hernán Cereceda B., Servando Jordán L., Enrique Zurita C., Osvaldo Faúndez V., Roberto Dávila D., Lionel Béraud P., Arnaldo Toro L., Efrén Araya V., Germán Valenzuela E., Hernán Alvarez G. y Mario Garrido M.

Corte de Apelaciones de Santiago,
12 de diciembre de 1991

Menichetti Fuentes, Eduardo con
Asociación Nacional de Fútbol
Profesional
(recurso de protección)

Derechos de transmisión televisiva - Partida de fútbol - Derecho de propiedad sobre bienes incorpóreos (derechos originados en contratos) - Controversias surgidas con ocasión de la ejecución de contratos - Recurso de protección: medio procesal idóneo - Orden de no innovar - Precautorias innominadas - Providencias innovativas - Potestades de tribunal de protección - Agilidad en la administración de la justicia - Riesgos de la celeridad judicial - Procesos inquisitivos - Acciones sumarias - Efectos de las resoluciones adoptadas en proceso protectivo como ordenes de no innovar.

MEDIDA DE PROTECCIÓN (PREVENTIVA):
accede a la suspensión de una partida de fútbol que se iba a realizar el mismo día en que se pronuncia la medida (voto en contra)

DOCTRINA.— *En el recurso de protección el tribunal de la instancia posee, en conformidad con lo dispuesto por el artículo 20 de la Constitución, amplias atribuciones para adoptar, aun antes de solicitar informe al recurrido, todas las providencias que juzgue necesarias para asegurar la debida protección del afectado. (*)*

(*) No la hay expresada en la resolución innovativa; dado que el tribunal accede a la medida de no innovar solicitada por recurrente, ha de estimarse que la entidad del interés comprometido en la controversia suscitada entre recurrente y recurrido ha merecido al tribunal disponer la detención del curso causal de la situación litigiosa a fin de impedir sus efectos.

En razón del interés doctrinario y práctico que presenta la admisión de medidas innovativas en el recurso de protección y bajo la denominación de "orden de no innovar", se incluye esta resolución que ha adquirido todos los rasgos de una sentencia definitiva e incluso ejecutoriada.

Sobre medidas innovativas en el recurso de protección véase Carabantes Cárcamo, en esta Revista, tomo 88 (1991) 2.5, 340-343 y comentario del Prof. Soto Kloss en ob. cit. Primera Parte, Sección Derechos, pp. 55-60.

Véase comentario a este caso en pp. 45-47.

LA CORTE

Vistos:

Resolviendo el segundo otorgando esta Corte, según de conformidad a lo dispuesto artículo 20 de la Constitución Estado, de inmediato, las que juzgue necesarias para debida protección del peticionante a la suspensión del partido a jugarse en el día de hoy entre los representantes de los Colo y Coquimbo Unido, en Coquimbo, por un término de cinco días; al primer otro resoluto.

Comuníquese lo resuelto rápidamente.

Acordada, en cuanto a partido, con el voto en contra señor Sergio Valenzuela estuvo por no dar lugar a dicho Nº 2833-91 P.

Pronunciada por los ministros Sergio Valenzuela P., Juan Luis Pozas Maldonado (su)

COMENTARIO

Bullado caso éste que mente, una copiosa cobertura para todo aquel gran comunidad cuya cultura prioritario, la radio y la televisión. to de vista jurídico, sin embargo comentario, no obstante con lo presentaba, tanto práctico especulativo; a este último rigen estas líneas.

1.— La mayor de las cosas antiguo, se hacen a la acción justicia es la lentitud mientos y la tardanza con vienen a resolver un litigio las que expiran, no decía hace siglos, a lo que aún ayudan— también participan en el proceso